

Así por unanimidad de votos lo decretaron los ciudadanos Presidente y Ministros que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José María Iglesias.*—*M. Auza.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*E. Montes.*—*L. Félizquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis M<sup>o</sup> Aguilar*, secretario.  
—Es copia que certifico. México, Julio 5 de 1875.—*Enrique Landa*, oficial mayor.

## AMPARO

*Promovido ante el Juez de Distrito de Veracruz, por el C. Joaquín Gerónimo Solano, contra el Juez de 1<sup>a</sup> Instancia de Jalapa, por violación de garantías.*

*Pedimento del C. Promotor Fiscal.*

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que el C. Joaquín Gerónimo Solano, solicita amparo y protección contra la orden de prisión que dió el C. Juez de 1<sup>a</sup> Instancia de Jalapa, respecto de su persona, para que fuese conducido con segura custodia á la disposición del C. Juez de 1<sup>a</sup> Instancia de Tezuitlan, Estado de Puebla, en virtud de exhorto que recibió para el efecto, sin que hubiese cometido delito alguno, asegurando que ese grave perjuicio se lo causaba el C. Jefe Político del mismo partido de Tezuitlan, de acuerdo con el de Papantla, por enemistad personal y otros motivos privados, suplicando al mismo tiempo se suspendiera el acto reclamado, con citación de los artículos respectivos de la Constitución Federal, en que estaban consignadas las garantías que en su persona se violan. Se acordó di-

cha suspensión y se pidieron los informes correspondientes, de los cuales resulta, que el C. Juez de 1<sup>a</sup> Instancia de Jalapa procedió á la prisión del promovente por disposición del de Tezuitlan, y éste manifiesta y acredita que no existe actuación alguna en su juzgado en contra del C. Solano, por ningún delito, ni ha dirigido exhorto al de Jalapa para su aprehensión; por lo que considera de estricta justicia que con arreglo á los arts. 101 y 102 de la misma Constitución, se sirva el Juzgado amparar al quejoso, contra la orden de prisión decretada por el Juzgado de 1<sup>a</sup> Instancia de Jalapa, de D. Joaquín G. Solano; dejando á éste su derecho á salvo para repetirlo contra quien hubiese lugar.

H. Veracruz, 14 de Enero de 1875.—*Lic. J. M. López de Escalera.*

*Sentencia del C. Juez de Distrito.*

H. Veracruz, Enero 18 de 1875.

Visto este juicio promovido por Joaquín Gerónimo Solano, en solicitud de amparo contra la providencia del Juez de 1<sup>a</sup> Instancia de Jalapa, que lo redujo á prisión y lo consignó á la autoridad política del Canton, para que lo remitiera á Tezuitlan á disposición del Tribunal de 1<sup>a</sup> Instancia del mismo lugar, que lo exhortó para ese efecto en la causa que, según se asienta, se le instruye por el delito de abuso de confianza, con cuya providencia alega el quejoso, que se han violado en su persona las garantías que otorga la Constitución general de la República en sus arts. 16 y 19; los informes remitidos á este Juzgado por los citados Juez de Jalapa y Tribunal del Distrito de Tezuitlan, con lo pedido por el C. Promotor fiscal y demás piezas conducentes.

Resultando de autos, que el Juez de 1<sup>a</sup> Instancia de Tezuitlan, ordenó la prisión de Solano y lo consignó á la autoridad política, para su remisión al Tribunal reque-

rente, todo lo cual se comprueba del informe del mismo Juez ejecutor del acto reclamado y de la certificación que la misma autoridad le expidió al quejoso, y que éste adujo al juicio. Que de la propia manera resulta, según el informe que su por parte produjo el Tribunal de Tezuitlan, que en esa oficina no existían antecedentes que funden procedimiento criminal contra Solano por ningún delito, y en cuya virtud se haya librado el exhorto de que se ha hecho mérito, fundando su informe en las diligencias que mandó practicar para esclarecer ese hecho, de las cuales acompañó copia.

Considerando: que sentados estos precedentes, el quejoso ha sido víctima de una trama que se ha urdido por medios indignos y reprobados para perjudicarlo, y que se ha velado además con el aparato de la justicia y de la autoridad de los Jueces que figuran en la expedición del exhorto y su cumplimiento, y así se deduce claramente de los atestados que cada uno de esos funcionarios ha presentado en corroboración de sus asertos y para justificación de sus procedimientos. Que siendo incuestionable que el exhorto mencionado no ha procedido del Tribunal del Distrito de Tezuitlan, es viciosa y no tiene fundamento la providencia dictada contra Solano por el Juez de Jalapa, y no debe por lo tanto subsistir: que reputándose con razón, falso ó supuesto ese documento, si se atiende á lo expuesto en el particular por dicho Tribunal, y dejando á salvo toda consideración sobre las circunstancias en que se haya podido abusar al extenderlo, de los sellos de la oficina y de las firmas de los empleados, para revestirlo de formalidad y autorización, de la propia manera que, sobre los términos en que se haya cuidado por el Juez requerido de cerciorarse de su autenticidad, á fin de no exponerse á causar perjuicios indebidos, no incumbe á este Juzgado investigar cómo ni por quién se ha cometido esa falsedad, pues su oficio se limita en el caso, á juzgar si ha ó no habido infracción de las garantías re-

clamadas, para hacerlas efectivas y remediar la violación, dejando en los derechos del quejoso, el deducir sus acciones contra quien resulte responsable, y á los Tribunales del fuero común, el conocimiento del delito.

Considerando: que puestos de manifiesto los hechos que ha sido preciso tener en cuenta, se ve con cuánta justicia Solano se ha quejado de la prisión que se le impuso, en la cual se le ha mantenido largo tiempo, causándole enorme vejación, por importar un atentado contra su libertad ese apremio, y contra el derecho que le asiste para no ser sometido á la acción de autoridad incompetente; debiendo entenderse que es tal el Juez de Jalapa, atendiendo que, al fundar sus procedimientos sobre un requisito falso, ha obrado sin la jurisdicción que no puede atribuirle el supra dicho exhorto del Tribunal de Tezuitlan, toda vez que se ha reconocido la falsedad de la orden de prisión en la pretendida causa sobre abuso de confianza á que aquel se refiere; y de todo lo dicho, es consecuencia, que se ampara al interesado, como lo ha pedido.

Por estos fundamentos y consideraciones, y teniendo presente además lo dispuesto en los arts. 101 y 102 de la Constitución general y ley de 20 de Enero de 1869, el C. Juez definitivamente juzgando, falla:

La justicia federal ampara y protege á Joaquín Gerónimo Solano, contra la providencia del Juez de 1ª Instancia de Jalapa que lo redujo á prisión y lo consignó á la autoridad política del Canton del mismo nombre, para que lo remitiera á Tezuitlan á disposición del Tribunal de 1ª Instancia de aquel Distrito, y manda asimismo se le ponga inmediatamente en libertad absoluta, á cuyo fin se librará la orden correspondiente.

Notifíquese, sáquense las copias de estilo y remítanse los autos á la Suprema Corte de Justicia para los fines de la ley.

Así lo decretó y firmó el C. Juez, pri-

mer Suplente de Distrito: damos fé.—*P. Mendizábal Ortiz.*—De asistencia.—*José M<sup>te</sup> Gonzalez.*—*Vicente Simancas.*

Es copia de sus originales, que certifico. Hércules Veracruz, Enero 29 de 1875.—*P. Mendizábal Ortiz.*

*Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Mayo 17 de 1875.

Visto el juicio de amparo promovido ante el Juez de Distrito de Veracruz, por el C. Joaquín Gerónimo Solano, contra el Juez de 1<sup>a</sup> Instancia de Jalapa, que lo redujo á prision y lo consignó á la autoridad política del Canton, para que lo remitiera al Tribunal de 1<sup>a</sup> Instancia del mismo lugar, con motivo de la causa que se le instruye por el delito de abuso de confianza, con cuyo acto juzga el quejoso violadas en su persona las garantías que otorgan los arts. 16 y 19 de la Constitucion general. Vista la sentencia del Juez de Distrito que amparó al quejoso y las demás constancias que obran en autos, se decreta: que es de confirmarse y se confirma por sus propios legales fundamentos, la sentencia que pronunció el Juez de Distrito de Veracruz en 18 de Enero del presente año.

Devuélvase las actuaciones al Juzgado de su origen, acompañándole copia de esta sentencia para los efectos consiguientes, archivándose á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron—*José María Iglesias.*—*Ignacio Ramirez.*—*E. Montes.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México, Julio 12 de 1875.—*Enrique Landa*,

## AMPARO

*Promovido ante el Juzgado de Distrito de Michoacan, por los CC. Martín Torcida y otros, contra el Administrador de Rentas de Morelia, que les exige el pago de contribuciones, por los sueldos que tienen asignados como empleados federales.*

*Pedimento del C. Promotor Fiscal.*

C. Juez de Distrito:

Varios empleados de la Federacion residentes en esta ciudad, ocurrieron al Juzgado del digno cargo de vd., en 16 de Diciembre próximo pasado, exponiendo: que el C. Administrador Principal de Rentas de esta capital les exigia con apremio, el pago de la contribucion personal decretada en 31 de Julio de 1872, y en 2 de Agosto del año que acaba de concluir: que como esta contribucion grava directamente los sueldos que tienen asignados por la ley general de presupuestos, creen los quejosos que se ha invadido de esta manera una de las atribuciones cometidas al Congreso de la Union en la parte 11<sup>a</sup> del artículo 72 de la Constitucion General; y que los procedimientos para exigirse el cobro, violan las garantías de los artículos 4<sup>o</sup> y 5<sup>o</sup> en su primera parte; 17, 22 y 27 de la misma. En esta virtud y fundados en las fracciones 1<sup>a</sup> y 3<sup>a</sup> de la ley de 20 de Enero de 1869, pedian el amparo de la Justicia federal.

El ciudadano Administrador de Rentas se propone demostrar en su difuso informe, que los decretos de que se trata, no violan en manera alguna las garantías consignadas por los quejosos: que la Legislatura del Estado ha podido darlos con plenas facultades constitucionales; y que no ha habido apremio al exigir la contribucion correspondiente al año fiscal anterior y á la parte del que va corriendo. Entra á propósito en algunas consideraciones, cuando examina cada una de las garantías que se creen violadas; pero el valor que tengan dichas consi-